

Siria y Líbano

Apagones como estilo de vida

Alessandra Galié y Bernhard Hack

Siria y Líbano son dos países cuyas políticas, economías y sociedades han estado estrechamente entrelazadas durante mucho tiempo. Este capítulo analiza los distintos enfoques de ambos países sobre el concepto de servicios 'públicos' y 'privados'. Al mismo tiempo, destaca cómo ciertos organismos internacionales y acuerdos regionales de comercio están influyendo en sus políticas nacionales, conduciéndolas hacia el modelo dominante de reformas orientadas al mercado.

Tras una breve introducción a la historia común de Siria y Líbano el capítulo se centra en la situación por la que atraviesan actualmente los servicios públicos en ambos países. A continuación, se examinan los actores internacionales que participan en el proceso de reforma; concretamente, la Unión Europea (UE), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). La última parte trata de forma analítica en forma específica la evolución actual de los servicios hídrico y eléctrico.

¿Dos países, una nación?

Siria y Líbano se erigieron como dos estados independientes tras el fin de la primera guerra mundial, cuando bajo el mandato francés la República Libanesa fue separada de la Gran Siria como estado mayoritariamente cristiano. En 1975 estalló en Líbano una guerra civil que dividió al país en varios bandos, tanto por cuestiones étnicas y religiosas como por lealtad a las potencias de la zona, sobre todo Israel y Siria. Cuando terminó la guerra, en 1990, la presencia de Siria en Líbano se prolongó en virtud del Tratado de Hermandad, Cooperación y Coordinación, firmado en 1991. Los políticos sirios hablaban con frecuencia de “dos países y una nación”.

En 2003 la Casa Blanca aprobó la Ley de Responsabilidad de Siria y de Soberanía de Líbano (SALSA, en sus siglas en inglés). El texto acusaba a Siria de apoyar el terrorismo y la resistencia iraquí, escondiendo armas de destrucción masiva y ocupando el territorio libanés. En 2004 la Resolución 1559 de la ONU exigía que Siria se retirara de Líbano con ocasión de las elecciones de mayo de 2005. Los gobiernos sirio y libanés criticaron la resolución por considerarla “una injerencia en las relaciones entre dos países amigos” (Jordan Information Centre, 2005). Con el asesinato del Primer Ministro Rafik Hariri, el 14 de febrero de 2005, surgió un movimiento de base que reivindicaba la autodeterminación de Líbano con manifestaciones pacíficas en las calles de Beirut. Ante la creciente presión internacional, el ejército sirio y sus servicios secretos abandonaron finalmente el territorio libanés a fines de abril de 2005.

Líbano y Siria mantienen una compleja relación económica de simbiosis que se ha visto comprometida sólo parcialmente con la reciente retirada de las tropas sirias. Sus economías se solapan en gran medida en los ámbitos de mano de obra, finanzas, comercio y energía. Líbano necesita mano de obra barata, con poca o sin especialización, para trabajar en los planes de reconstrucción del

gobierno y para servir en los negocios del sector privado y como servicio doméstico. Se calcula que en Líbano hay entre 400 mil y 1 millón de trabajadores sirios. Por otro lado, decenas de miles de trabajadores libaneses están contratados en el incipiente sector bancario de Siria.

Siria y Líbano también dependen mutuamente en materia de relaciones comerciales. Para poder llegar a los mercados de países vecinos por tierra Líbano no tiene otra opción que enviar sus mercancías a través de Siria. Siria, por su parte, complementa su economía por sustitución de importaciones con productos disponibles en el libre mercado libanés. Siria, con importantes reservas de petróleo y gas, ha estado exportando energía al Líbano desde la posguerra civil. Líbano, por su parte, exporta agua a Siria. Sin embargo, las recientes crisis políticas entre los dos países han provocado problemas en el suministro.

A pesar de su historia compartida y su interdependencia, Siria y Líbano han seguido vías políticas muy distintas. Siria adoptó políticas socialistas, con un Estado centralizado, mientras que Líbano se decantó por un enfoque orientado al mercado. Curiosamente, ambos países hoy se ven presionados de forma similar para que reformen sus servicios públicos.

Servicios públicos en Líbano

El sector público, a pesar de ser relativamente amplio, se encuentra en una situación caótica y los servicios básicos suelen estar limitados. El gobierno emplea a unas 260.000 personas, que representan el 6,5 por ciento de la población. El gasto público asciende a 7.000 millones de dólares, la mitad de los cuales se destina al servicio de la deuda. El sector está plagado de corrupción y, en muchos casos, funciona como una especie de plan de pensiones para los políticos de edad avanzada, sus amigos y familiares. En 2004, el *Índice de Percepción de la Corrupción* elaborado por Transparency International situaba al país en la posición 97, lo cual indica un nivel de corrupción muy elevado. Esta falta de rendición de cuentas se ve aún más enturbiada por un proceso de toma de decisiones políticas en manos de administradores designados, la mayoría de los cuales tiene poca experiencia en la gestión de grandes organismos del sector público. Las redes hídricas son extensas y llegan a la mayoría de hogares, pero la calidad es escasa. El tratamiento de aguas residuales es prácticamente inexistente. Los cortes de energía y los apagones son el pan de cada día. Las industrias, e incluso los hoga-

res, dependen de generadores particulares, que les otorgan cierta independencia de la empresa eléctrica, famosa por su mal funcionamiento. Se calcula que el 55 por ciento de los ciudadanos no paga las facturas eléctricas, y que casi el 50 por ciento tampoco paga los impuestos.

Deuda y presiones hacia la reforma

La deuda exterior de Líbano asciende a un total de 36.000 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un 180 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB) y la convierte, por lo tanto, en una de las más elevadas del mundo. Se estima que el pago del servicio de la deuda representa más del 45 por ciento del presupuesto total del gobierno. La deuda se mantiene principalmente a través de bancos libaneses que movilizaron su gran base de depósitos para financiar los déficit presupuestarios (EC, 2005). La existencia de estas reservas ha protegido a Líbano de parte de las presiones sufridas por otros de los llamados países en desarrollo. En la conferencia de donantes conocida como 'París II' (noviembre de 2002), el gobierno anterior prometió generar más de 5.000 millones de dólares con la privatización de las telecomunicaciones y la electricidad, una cifra que, según la opinión general, peca de ambiciosa. Teniendo en cuenta el importe de la deuda pendiente, resulta difícil entender qué cambiará con las ganancias derivadas de la privatización.

Desde que las tropas sirias se retiraron de Líbano se ha hablado mucho sobre otra posible conferencia de donantes para Líbano. Se celebre o no un 'París III' está claro que, en esta ocasión, no será fácil deshacerse de los hilos atados. Francia, el Reino Unido y Estados Unidos ya han lanzado un mensaje que no da lugar a segundas lecturas. No habrá más préstamos ni ayudas hasta que no haya reformas. Una tercera conferencia de donantes exacerbará la naturaleza bilateral de la deuda de forma significativa y esto, a su vez, aumentará las restricciones sobre las políticas libanesas. Así, el gobierno debería llevar a cabo determinadas reformas y, sobre todo, seguir un calendario concreto de privatización (Photiades, 2005). De hecho, ya se han dado algunos pasos en dicha dirección

El Consejo Superior de Privatización

Durante el anterior gobierno del difunto Rafik Hariri la prioridad de reforma estructural consistió en recaudar 6.000 millones de dólares en 2003 y 2004 mediante la privatización de varias empresas de servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad, agua y transporte, entre otros). La Ley de Privatización de 2000 dispone el marco



necesario para la liberalización de empresas estatales, estableciendo el Consejo Superior de Privatización y definiendo que las ganancias de la privatización se destinarán a la devolución de la deuda.

Sin embargo, los avances han sido lentos y el gobierno se quedó muy lejos de cumplir con los compromisos de París II. A causa de la polémica surgida entre los defensores y los detractores de la liberalización en el Consejo de Ministros, la privatización de las telecomunicaciones se paralizó, y la venta de la Compañía de Agua, Electricité du Liban, Middle East Airlines y los puertos se ha suspendido por el momento. Las posibles privatizaciones se complican también por el bajo grado de interés de los inversores extranjeros debido, entre otras cosas, al elevado índice de corrupción, las deficiencias en infraestructuras y al hecho de que el gobierno rescindiera dos contratos con operadores de telefonía móvil tres años antes de que éstos finalizaran (EC, 2005).

El nuevo gobierno

El nuevo gobierno, en el que acérrimos reformistas ocupan puestos clave, está decidido a superar estos obstáculos. El Primer Ministro, Fouad Siniora, lleva mucho tiempo luchando por la reforma económica. Controla el Ministerio de Finanzas, Economía y Telecomunicaciones, y dejó los Ministerios de Agricultura a sus aliados. Estos ministerios encierran la clave de cualquier plan de reforma, ya que eso permitirá a Siniora privatizar los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad, y asegurar los ingresos previstos de otras empresas estatales como Casino du Liban y la compañía tabacalera Regie. Siniora también introdujo a Sami Haddad, ex-funcionario de la Corporación Financiera Internacional (FCI), el brazo corporativo del Banco Mundial, cuya misión consiste en acabar con la oposición política a las privatizaciones. Según sus recientes declaraciones en una entrevista *“la privatización es un pilar fundamental de toda esta reestructuración del sector público. Se trata de una necesidad; no tenemos otra elección (Executive, 2005)”*. Estos dos dirigentes cuentan con el apoyo de Saad Hariri, el heredero político del Primer Ministro asesinado y líder del Movimiento Futuro, la facción con mayoría absoluta en el gobierno.

Servicios públicos en Siria

La ideología socialista del Partido Baaz sostiene que la propiedad pública de los bienes nacionales está en el inte-

rés del país. En 2005, monopolios del sector público controlan la fabricación de cemento, las refinerías de azúcar, la producción de fertilizantes, las refinerías de petróleo, las empresas de agua, la electricidad, las telecomunicaciones de línea fija y los seguros. Algunos productos agrícolas están subsidiados, al igual que el petróleo y el agua, los bienes que reciben mayores subvenciones, equivalentes al 12 por ciento del PNB en 2004. Las inversiones en infraestructuras están financiadas por el Estado, salvo en el caso de los proyectos realizados por la ayuda externa. A pesar de la intención de reducir el gasto público, en 2004 el gobierno actualizó sus infraestructuras y destinó un 20 por ciento de los gastos de inversión al transporte y las comunicaciones, un 16 por ciento al agua y la electricidad, y un 14 por ciento a irrigación agrícola (Oxford Business Group, 2004:59). Por lo general, se considera que la insuficiencia de infraestructuras es la causante del mal suministro de servicios, sobre todo en los asentamientos informales pobres de las ciudades más grandes, Damasco y Aleppo, y en las zonas rurales más remotas. En 2002, el 94 por ciento de la población urbana disponía de acceso a agua potable, mientras que el suministro de agua llegaba únicamente al 64 por ciento de la población rural. En cuanto al saneamiento, la cobertura era del 97 por ciento de la población en las zonas urbanas, y del 56 por ciento en las rurales. La electrificación de las regiones rurales alcanzaba el 99,4 por ciento de la población total (UNICEF, 2005).

Últimamente, el gobierno ha previsto la participación de empresas privadas para mejorar la gestión de algunos sectores públicos. Ya hay asociaciones público-privadas (PPP, en inglés) en el ámbito municipal del transporte público, el tratamiento de aguas residuales y la recogida de residuos sólidos. Sin embargo, según el informe inédito ‘Proyecto de Administración Municipal en Siria’, las PPP han sido prohibidas por el Primer Ministro (Plangroup, 2003:119). Hay también contratos de construcción, explotación y transferencia (BOT, en inglés) con empresas privadas en el sector de la telefonía celular y se están extendiendo en el sector del petróleo. De hecho, Siria está abriendo paulatinamente su sector privado, pero sigue manteniendo los servicios básicos en manos estatales.

No obstante, la liberalización parece estar reñida con la ideología socialista del Partido Baaz que, desde que ascendió al poder, ha fomentado la centralización del sistema público. En opinión de algunos analistas, Siria está obligada a liberalizar porque se enfrenta a una crisis eco-

nómica. Otros, en cambio, sostienen que el gobierno, desestabilizado por una crisis en materia de política nacional y exterior, está estudiando las propuestas de liberalización internas e internacionales.

En realidad, la historia del Partido Baaz sirio parece haber seguido siempre una orientación a medio camino entre la ideología y el pragmatismo, un enfoque que refleja las decisiones que está adoptando actualmente el gobierno. Desde los años sesenta, las medidas del Estado centralista, además de perseguir la acumulación económica, garantizaban al partido su apoyo popular. Al mismo tiempo, pequeñas concesiones realizadas al sector privado equilibraban las presiones reformistas por parte de los empresarios. Así pues, este arreglo de compromiso mantenía la estabilidad social combinando un gran sector público y un pequeño sector privado.

Las reformas

A mediados de los años cincuenta, Siria, ya independiente, se caracterizaba por profundas desigualdades sociales y por constantes crisis políticas. En 1963 subió al poder el Baaz, un partido radical formado por las clases subordinadas. El partido estableció un Estado socialista que redujo la expansión de las empresas privadas y centró la economía en el sector público (Hinnebusch, 1995). Se nacionalizaron todas las grandes industrias, los bancos y las aseguradoras. Una economía de sustitución de importaciones protegía a la industria nacional de la competencia extranjera. Se emprendió una reforma agraria que dio tierras a los campesinos y la producción agrícola pasó a estar centralizada. El Proyecto de Desarrollo del Río Éufrates, un ambicioso plan de desarrollo, debía ampliar los sistemas de irrigación y el suministro de agua y electricidad a las zonas rurales de Siria. Escuelas, hospitales y otras infraestructuras comenzaron a llegar a los lugares más remotos del país.

Sin embargo, algunos períodos de estancamiento económico obligaron al gobierno a otorgar mayor espacio al sector privado nacional, cuyas inversiones podrían aliviar la dependencia de Siria de ayuda y préstamos extranjeros. El colapso del bloque comunista a principios de los años noventa desprestigió la ideología socialista del Baaz y favoreció aún más al sector privado. A pesar de ello, el Estado mantuvo hasta fines de los noventa el control de todas las industrias básicas, como la producción y el refinado de petróleo, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, la producción y distribución de energía, y la distribución de agua.

En los últimos años, a pesar de la estabilidad macroeconómica, Siria se ha enfrentado a dificultades cada vez mayores. Su lento crecimiento económico no pudo compensar el alto índice de desempleo, del 20 por ciento. Se necesita una diversificación de los ingresos, dos tercios de los cuales dependen actualmente de las ganancias, menguantes, del petróleo. El gobierno también debe solucionar la creciente escasez de agua, un recurso vital para el sector agrícola, que representa el 30 por ciento del PNB.

‘Reforma’ o ‘renovación’ se han convertido en las palabras de moda, tanto dentro como fuera del país, desde que el difunto Hafez al-Assad fuera sustituido por su joven hijo Bashar como Jefe de Estado, en junio de 2000. Ante los retos que se le planteaban –mejorar la economía, aumentar el apoyo popular y contener las presiones reformistas y conservadoras–, el nuevo presidente se centró en las propuestas de reforma más urgentes. En su discurso de investidura, se comprometió a modernizar el sistema, aunque reafirmando la ideología baazista como eje fundamental de las políticas del gobierno. Rendición de cuentas y eficiencia, términos inspirados por un nuevo enfoque orientado al mercado, se convirtieron en las palabras clave para las reformas del sector público. Sin embargo, tal como ha estado reiterando el gobierno, la privatización directa no constaba en la agenda.

En realidad, las reformas se han dirigido gradualmente hacia la privatización. En los últimos años, sectores públicos enteros, antes controlados sólo por un ministerio, se han dividido en unidades menores que, finalmente, permiten la privatización de algunos segmentos de la producción de servicios. Esto queda reflejado en las palabras del Ministro de Planificación, Issam az-Zaim: *“deseamos encaminarnos hacia un sector público independiente y responsable, gobernado por los precios del mercado y con una administración separada de la propiedad”*. Paolo Zacchia, un economista del Banco Mundial, opina que el gobierno sirio está persiguiendo un arreglo de compromiso entre lo privado y lo público adoptando sistemas de liberalización flexibles, como contratos de gestión con una menor carga política (entrevista con Paolo Zacchia, Oficina del Banco Mundial, Beirut, 29 de septiembre de 2005).

Así, los pasos del gobierno hacia la liberalización han sido paulatinos y, mientras tanto, los funcionarios del gobierno no han cesado de expresar su firme compromiso con el bienestar social. En 2002, el Ministro de Comercio Exterior habló sobre la necesidad de incorpo-



Actores y presiones internacionales

rar a la gestión de algunos sectores un sector privado responsable y comprensivo, con derechos pero también con obligaciones para con la comunidad y el país (George, 2003:165). En 2004, la comisión de planificación del Jefe de Estado anunció que Siria adoptaría una economía de mercado antes del año 2010. El Primer Ministro también declaró: *“actualmente no hay barreras que impidan al sector privado invertir en cualquier sector (...) aunque algunas partes del mercado seguirán protegidas”* (Oxford Business Group, 2004:20-21). Los principales objetivos del gobierno sirio, según el Primer Ministro, consistían en *“alcanzar la estabilidad macroeconómica, alimentar y vestir a la población, y proporcionar vivienda, educación y sanidad (...) además de mejorar las condiciones de vida de todos los sirios”* (ibíd). Estos compromisos se reafirmaron en 2005, con una nueva declaración de la oficina del Primer Ministro, según la cual el gobierno perseguía un *“crecimiento sostenible no vulnerable a las conmociones sociales”*.

Durante la conferencia nacional del Partido Baaz, en junio de 2005, Siria se comprometió a mantener una ‘economía social de mercado’. Dicho de otro modo, se trataría de una economía de mercado en la que los servicios básicos estén garantizados por la administración pública, los servicios civiles estén protegidos, y las redes de seguridad social se vean fortalecidas. La creación de esta ‘vía socialista’ hacia una economía abierta sirve a varios propósitos. El gobierno se enorgullece de lograr cambios sin seguir los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros internacionales. Esto reduce la dependencia política y económica de Siria con respecto a instituciones y gobiernos extranjeros. Además, sirve para introducir políticas de liberalización con la retórica arabista del Partido Baaz, fortaleciendo así la posición ideológica del gobierno.

Aunque la privatización parcial satisface las presiones liberalizadoras internacionales y nacionales, al asumir toda responsabilidad sobre el agua, la energía y otros servicios básicos, y excluirlos del mercado privado, el gobierno reafirma su compromiso con la ideología socialista en un esfuerzo por reforzar el apoyo popular. Y aún más, al seguir controlando los servicios básicos –sobre todo el agua y la energía–, el gobierno conserva un poder absoluto sobre una economía que está basada en el petróleo y en la agricultura, una actividad que depende del agua. Estos sectores clave, que se rigen por relaciones clientelares, constituyen la base del poder económico y de la legitimidad social del gobierno.

A pesar de los encendidos debates nacionales sobre la liberalización de los sectores públicos, las auténticas alternativas disponibles están definidas por los actores regionales y globales que dominan el discurso. Tanto Líbano como Siria aspiran a ser miembros de la futura Área de Libre Comercio Euromediterránea y a incorporarse a la Organización Mundial del Comercio. Durante el proceso de integración, se exigirá a ambos países que apliquen numerosas y amplias reformas en la propiedad y la gestión de los servicios públicos. El Banco Mundial, de hecho, lleva ya años presionando por que se produzca esa transición.

La Unión Europea y Euro-Med

En 2003, Líbano firmó un Convenio de Asociación con la Unión Europea (UE), por el que ambas partes se comprometen a abrir sus mercados y eliminar los aranceles gradualmente. Siria y la UE han estado trabajando de forma intensiva sobre un Convenio de Asociación desde fines de 2003. En el marco del Partenariado Euromediterráneo, los países asociados acabarán integrándose en el mercado interno como parte de la Política Europea de Vecindad (PEV). El objetivo último de Euro-Med es la creación del Área de Libre Comercio Euromediterránea para 2010.

La UE es el principal donante individual de Líbano. Canaliza subvenciones, préstamos y garantías a través de los países miembros y, multilateralmente, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de partidas presupuestarias especiales, como el programa MEDA (Asistencia al Desarrollo Mediterráneo), el principal instrumento financiero para la implantación del Partenariado Euromediterráneo. A través del MEDA, se financian actividades de desarrollo institucional y económico. Un fondo de ajuste estructural de 50 millones de euros se emplea para financiar la transición y la estabilización económicas. Con miras a ampliar las reformas, el MEDA respalda la creación de una autoridad reguladora para el sector de las telecomunicaciones, así como un Programa de Planificación de Inversiones para rehabilitar las infraestructuras en los sectores del agua, la energía, el medio ambiente, las obras públicas y el transporte. Las subvenciones se complementan con la financiación de capital de riesgo y de bonificaciones del tipo de interés vinculado con los préstamos del BEI. El Banco ofrece un Fondo de Capital de Riesgo de 100 millones de euros,

con una especial atención a la privatización que ofrece garantías a los inversores.

Para mejorar su economía de cara al Área de Libre Comercio Euromediterránea, la UE recomienda a Siria estimular el crecimiento y las oportunidades de empleo, diversificar la economía, reducir la dependencia de los ingresos del petróleo, mejorar el entorno empresarial, racionalizar y mejorar la calidad del sector público, y modernizar los sistemas sanitario y educativo. En este contexto, una serie de organismos ha estado trabajando para reformar la economía siria. El Centro Empresarial Sirio-Europeo (SEBC, en inglés) se ha creado para aumentar la competitividad del sector privado sirio. El Fondo para el Partenariado Euromediterráneo (FEMIP, en inglés) fue creado para incrementar la participación económica del sector privado. El BEI *“emplea importes considerables de capital de riesgo para el desarrollo del sector privado”* (Euro-Med Partnership, 2004:3). El ‘Fondo de Modernización de Instituciones y Sectores’ (ISMF, en inglés) se dedica a fomentar la modernización económica de Siria con vistas a la creación del Área de Libre Comercio Euromediterránea.

El Convenio de Asociación entre Siria y la UE otorga una especial importancia a las reformas del sector de los servicios. Entre los objetivos del programa, se encuentra *“la apertura de los mercados de la energía y el transporte”* (Euro-Med Partnership, 2004:22). Según el Middle East Report, una de las condiciones que impuso la UE para el convenio con Siria fue la transición de una economía pública a una privada. El informe también indica que *“el equipo sirio incluyó ‘servicios’ en la lista de sectores que se privatizarían, y a un ritmo más rápido, como manera de acelerar la firma [del convenio]. Esta concesión no se hizo pública”* (Haddad, 2005:7).

La importancia del Convenio de Asociación para Siria se hace evidente a la luz del deterioro de los vínculos con Estados Unidos. De hecho, la larga enemistad con Washington se ha vuelto a acentuar recientemente, después de que el gobierno estadounidense acusara al gobierno de Assad de apoyar al terrorismo e impusiera sanciones contra Siria, que cada vez está más aislada en el contexto regional e internacional. Siria, por lo tanto, ha optado por intentar fortalecer sus lazos con la UE y contrarrestar de ese modo las presiones económicas y políticas procedentes del otro lado del Atlántico.

El Banco Mundial

Las iniciativas del Banco Mundial (BM) para impulsar

reformas en Líbano han sufrido diversos reveses. En un primer momento, el llamado ‘Proyecto de Apoyo a la Privatización’ se centró en una estrategia de privatización, una legislación marco para ésta, y la preparación de unas políticas y un marco regulador propicios para los sectores de las telecomunicaciones y el transporte. El personal del Banco se negó a comentar las razones que motivaron que el proyecto no prosperara más allá del año 2000. En 1997 el Banco también había avalado la primera emisión de bonos libaneses en el mercado internacional, con una garantía de 100 millones de dólares. El dinero prestado se concedió para reestructurar la empresa estatal Electricité du Liban.

Desde 1997 el gobierno sirio sólo ha solicitado al BM servicios no crediticios. El Banco está ofreciendo a Siria actualmente asesoramiento técnico y subvenciones para reformas políticas y desarrollo institucional durante un período de transición hacia una economía de mercado. Según el BM, Siria se ha esforzado por sacar adelante la liberalización de los servicios desde el año 2000. De hecho, los sectores de las finanzas y las telecomunicaciones se han abierto al capital privado. Sin embargo, siempre según el Banco, el sector de los servicios sirio sigue estando subdesarrollado. El Banco criticó asimismo la sustitución de monopolios estatales por monopolios privados, como es el caso del duopolio concedido a empresas privadas en el sector de las telecomunicaciones móviles (World Bank, 2005:39-41).

La Organización Mundial del Comercio

Líbano está en proceso de adhesión a la OMC, donde cuenta con estatus de observador desde que solicitó el ingreso, en 1999. El país presentó un memorando de comercio exterior en mayo de 2001, acompañado por una serie de medidas de reformas normativas, como la nueva ley de aduanas, que reduce las tasas arancelarias. Líbano presentó una oferta de acceso a los mercados en junio de 2004, y se ha comprometido a eliminar todas las medidas incompatibles con las reglas de la organización y a adaptar su régimen comercial para que, en el momento de la adhesión, esté en plena conformidad con la OMC (EC 2005).

En octubre de 2001, medio siglo después de retirarse del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, en inglés), Siria solicitó formar parte de la OMC. Aunque el proceso parece hallarse en un punto muerto, los reformistas proliberalizadores, la UE y el BM siguen utilizando los planes de sumarse a la OMC



como ejemplo del acercamiento de Siria hacia la economía global.

Reformas en los sectores de la energía y el agua

A simple vista, las diferencias entre los sectores de servicios básicos en Líbano y Siria resultan más que asombrosas. Los servicios de Líbano se encuentran entre los más caros de la región y los de Siria entre los más baratos. Las infraestructuras de Líbano se vieron gravemente afectadas por la guerra civil y, básicamente, debieron ser reconstruidas desde cero durante los pasados 15 años. Siria, en cambio, siempre concedió una alta prioridad a la inversión en infraestructuras. A pesar de estas diferencias, en ambos países se observa un mal suministro de los servicios debido, entre otras cosas, al alto grado de corrupción. También ambos países han comenzado a adentrarse en el terreno de la privatización.

El sector eléctrico libanés

Líbano depende casi enteramente de fuentes externas para la producción de energía. Su factura anual para importar productos petroleros ronda los 1.000 millones de dólares, una cifra que aumentará con toda probabilidad si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos en el mercado del petróleo. Se han tomado varias medidas para reducir los costes energéticos. En primer lugar, a partir de principios del próximo año, Líbano estará conectado a la red eléctrica regional, formada, entre otros, por Egipto, Jordania, Siria y Turquía, con lo que se espera limitar los gastos en electricidad. En segundo lugar, un ventajoso acuerdo trienal con Kuwait permitirá la entrada al país de 800.000 toneladas de carburante por año. Finalmente, la introducción del gas natural aumentará la seguridad en el suministro, reducirá la factura energética y mejorará el medio ambiente (EC, 2005).

El Líbano tiene las tarifas eléctricas más elevadas de la región y unas de las más elevadas del mundo. Los consumidores libaneses pagan actualmente 13,7 céntimos de dólar por kilovatio-hora. Esto contrasta con los 2,7 céntimos de dólar por kilovatio-hora de Siria, la tarifa más económica de la región, incluso tras un reciente aumento del 70 por ciento. En 2001, sólo el 60 por ciento de los usuarios de electricidad disponía de contadores y recibía la factura. Los industriales libaneses se quejan de que los altos costes eléctricos están afectando gravemente a su capacidad para competir con el resto de productores regionales. Se producen cortes eléctricos todos los días, y

los generadores y distribuidores privados suministran el 20 por ciento de la demanda de electricidad, sobre todo en horas punta.

El sector está dominado por un monopolio estatal integrado verticalmente: Electricité du Liban (EdL). EdL posee y se encarga de los bienes de producción, transmisión y distribución. La empresa se encuentra en una situación económica complicada a causa de la escasa capacidad de recaudación, conexiones ilegales, elevadas pérdidas en la red técnica, problemas organizativos y la herencia de una infraestructura dañada durante la guerra civil. EdL pierde más de 450 millones de dólares al año y supone una pesada carga para el presupuesto del gobierno. Hace años que se debaten opciones para privatizar las actividades de EdL.

Ya en 1996, se puso en marcha un proyecto del BM denominado Reestructuración del Sector Eléctrico; pero fracasó. Es cierto que los fondos destinados al proyecto mejoraron las infraestructuras en cierta medida a costa de aumentar aún más la deuda de EdL. Sin embargo, el proyecto fue incapaz de sacar a flote la empresa. El Banco consideró que los resultados del proyecto y su propia actuación habían resultado altamente insatisfactorios; se habló incluso de licitaciones irregulares. A pesar de este estrepitoso fracaso, el BM prevé iniciar, en enero de 2006, otro proyecto para reformar el sector eléctrico (World Bank, 2002).

En 2002 se aprobó la Ley de Organización del Sector Eléctrico. Esta ley dispone la base legal para la reestructuración y pretende establecer una autoridad reguladora (EC, 2005). El Parlamento designó al banco de inversiones francés BNP-Paribas como asesor para la propuesta de venta de las operaciones de EdL, que tendrá lugar en 2005. Parte de la legislación permitía la reestructuración de las deudas de EdL, al concederse a la empresa un préstamo del tesoro de 150 millones que, sumado a un préstamo garantizado anterior de 133 millones de dólares, hacía ascender la deuda total de la empresa a 950 millones de dólares. La nueva legislación también contemplaba la posibilidad de que el gobierno dividiera EdL en tres empresas separadas, que se encargarían de la producción, la transmisión y la distribución, y la venta a inversores estratégicos del 40 por ciento de las acciones de las empresas de producción y distribución.

Desde 2003, el Ministerio de Energía y Agua ha estado trabajando con la Comisión Europea, haciendo uso de un préstamo concedido mediante el Programa de Planificación de Inversiones. En 2003 el proyecto elaboró

un inventario de los recursos y las operaciones del ministerio. En 2004 redactó una nueva política general y una estrategia para 2005-2020, cuyo objetivo sería crear un mercado eléctrico liberalizado y competitivo en que el gobierno sólo se responsabilice de las políticas y las estrategias (Oxford Business Group, 2005).

Teniendo en cuenta las largas dificultades de la empresa, pocos creen que el gobierno espere realmente conseguir privatizar el 40 por ciento del sector en el futuro más inmediato. Las posibilidades de encontrar un inversor estratégico dispuesto a asumir una participación minoritaria en alguna de las dos empresas son, lógicamente, mínimas. Sin embargo, la privatización de EdL sigue presente en la agenda aunque, debido a la situación económica, ésta sólo tenga lugar a largo plazo (EC, 2005).

El sector eléctrico sirio

La generación de electricidad en Siria se basa en el petróleo, el gas natural, la energía hidráulica y, potencialmente, la energía solar, eólica y de biomasa. El petróleo reporta a Siria ingresos importantes, ya que representa el 17 por ciento del PNB en 2005. La disminución de sus existencias lleva a algunos a prever que Siria pasará a ser un importador neto de petróleo durante la próxima década. La producción de gas, por otro lado, esta sustituyendo gradualmente a la de petróleo para cubrir la demanda eléctrica interna. Al mismo tiempo, la exploración de nuevos campos petrolíferos se ha intensificado con la participación de empresas extranjeras. Así, el 75 por ciento del petróleo que se produce actualmente en Siria se obtiene a través de acuerdos de producción conjunta. Las empresas extranjeras pueden presentar ofertas para explorar una serie de bloques asignados. En caso de descubrir una nueva reserva de petróleo están obligadas a formar una sociedad conjunta con la empresa estatal Compañía de Petróleo de Siria (SPC, en inglés). Las acciones que se repartirán entre los dos socios están preestablecidas por una fórmula fija. Desde 2004, grandes contratistas internacionales han estado construyendo centrales eléctricas mediante la modalidad de llave en mano (Oxford Business Group, 2004:81-89).

Al igual que en Líbano, el resto del sector energético sirio es un monopolio estatal integrado verticalmente. El Ministerio de Electricidad se encarga de la producción, la transmisión y la distribución, así como de la fijación de tarifas, las contrataciones y las normativas del suministro eléctrico (Brown, 2005:43). No hay ninguna ley específica que detalle los procedimientos para estructurar, for-

mular políticas y regular el sector de la energía, que está totalmente controlado por el Ministerio de Electricidad.

El suministro eléctrico parece ser el servicio más problemático de los prestados por el Estado, a pesar de los elevados subsidios concedidos al sector. Desde los años sesenta, el Estado ha destinado en torno al 15 por ciento del gasto público a la energía, principalmente al petróleo y la electricidad. La última inversión se produjo en 2003, cuando se obtuvo del BEI un préstamo de 190 millones de euros para la producción de energía. Sin embargo, como no se ha mejorado la distribución del servicio, el suministro sigue siendo irregular en muchos lugares (World Bank 2005:iii). Actualmente, el 72 por ciento de las fábricas dependen de generadores privados.

Los precios solían ser muy económicos para todos los clientes y hogares, sobre todo antes de 2002. En el año 2000 un kilovatio-hora costaba 1,52 céntimos de dólar. En 2002, el gobierno subió los precios en un 70 por ciento. Se prevén también otros incrementos, en un intento por acabar con los subsidios estatales y dirigirse hacia la plena recuperación de los costes. Este proceso de fijación de precios y los efectos negativos del aumento de las tarifas en los hogares con bajos ingresos han sido muy polémicos, ya que chocan con el concepto baazista de la economía de mercado social.

Las políticas de plena recuperación de los costes a través de las tarifas están recomendadas por el Fondo de Modernización de Instituciones y Sectores de la UE, junto con una especial atención a disposiciones para los grupos con desventajas sociales (Brown, 2005:37). Este Fondo también destaca la necesidad de reducir los costes de suministro mejorando la eficiencia de los sistemas de producción y distribución.

El suministro de agua en Siria

Aunque no padece un déficit hídrico grave Siria se enfrenta a una demanda creciente y a una disponibilidad cada vez más irregular. Desde 1925, los recursos hídricos de Siria pertenecen al Estado. La propiedad pública del agua está fuertemente asentada en la Constitución.

Los servicios de agua potable y saneamiento en Siria están administrados por el Ministerio de Recursos de Irrigación y Agua Potable, y el Ministerio de Vivienda y Construcción. El Ministerio de Administración Local y Medio Ambiente gestiona todo lo relacionado con el agua potable y las aguas residuales. Siria está dividida en 14 gobernaciones, cada una de las cuales cuenta con una administración del agua controlada por el gobierno.



Estas administraciones gestionan las empresas públicas que operan en el ámbito local. La 'unidad de suministro hídrico' actúa en el ámbito de las localidades, pero carece de poder de toma de decisiones y está formada por personal no cualificado.

El gobierno es el principal proveedor de servicios de infraestructuras del país. Durante las últimas cuatro décadas el Estado ha destinado entre el 30 y el 40 por ciento de sus inversiones en el sector público a ampliar el sistema de irrigación y llevar agua potable a las zonas rurales. No obstante, los planes de irrigación, defectuosos e ineficientes, han provocado altos niveles de salinidad y residuos, mientras que grandes fugas han reducido el suministro doméstico de algunas ciudades en un 50 por ciento. Por este motivo, en torno al 40 por ciento de las empresas privadas y numerosos hogares han excavado pozos particulares, provocando un impacto aún mayor en la disponibilidad general de agua (World Bank, 2005:45). Además de poner al día las infraestructuras hídricas de las principales ciudades, el gobierno está instalando contadores para controlar el consumo y aumentar gradualmente las tarifas. El consumo de hasta 20 metros cúbicos, por mes y por hogar, cuesta sólo siete céntimos de dólar. En lo que respecta a las aguas residuales, no se aplica tarifa alguna (Plan Group, 2003:82).

El tratamiento de aguas residuales sólo está presente en las grandes ciudades, y apenas el 30 por ciento de dichas aguas se somete a tratamiento. Las aguas no tratadas se utilizan para la irrigación, lo cual afecta negativamente a la salud y el saneamiento. La salud se ve aún más perjudicada por la total inexistencia de tratamientos adecuados para los residuos peligrosos. El Ministerio de Vivienda y Construcción está cerrando cada vez más acuerdos con socios extranjeros para la gestión de las aguas residuales (Polaris Institute, 2002).

Las normativas medioambientales están gestionadas por varios ministerios y, en estos momentos, están muy fragmentadas. Para reducir la generación de residuos el gobierno suele trabajar por un cambio en el comportamiento del consumidor. También ha priorizado el reciclaje de aguas tratadas para la agricultura. Cada una de las siete cuencas hídricas de Siria cuenta con su propio plan de acción medioambiental. Además, a través del FEMIP, el BEI ha concedido a Siria un préstamo de 2.000 millones de euros para reformas que favorezcan la mejora del suministro y el tratamiento de las aguas domésticas (Euro-Med Partnership, 2004).

El suministro de agua en Líbano

La guerra civil dejó al Líbano con unas infraestructuras de suministro hídrico obsoletas, construidas durante los años sesenta. Las pérdidas no justificadas sobrepasan el 40 por ciento. El servicio es irregular, entre otras cosas, porque son pocas las empresas con generadores que puedan mantener la distribución durante los frecuentes cortes eléctricos. Se calcula que el 80 por ciento de los recursos hídricos de Líbano están contaminados y, si bien la cobertura alcanza el 90 por ciento, la calidad del agua suele ser mala. Sólo algunos ciudadanos acomodados cuentan con agua canalizada por la empresa hasta sus hogares. Hay una estructura tarifaria plana, muy económica, que lleva décadas sin actualizarse, y los índices de recaudación apenas alcanzan el 10 por ciento.

La participación del sector privado en el suministro de agua se remonta al Imperio Otomano, cuando se otorgaron contratos de concesión a empresas privadas, incluidas las Compañías de Agua de Beirut, Zahle y Bhamdoun. A fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el gobierno empezó a recuperar las concesiones. Sin embargo, el desempeño de la empresa pública era deficiente y, a partir de 1993, el BM comenzó a conceder préstamos al gobierno libanés para rehabilitar y desarrollar los sistemas de agua y aguas residuales.

En 1994, se inició un programa de emergencia nacional y reconstrucción con miras a sentar las bases necesarias para que la participación del sector privado desempeñara un papel protagonista en el intento del país de volver a convertirse en un centro regional para el comercio y los servicios. El Ministerio de Agua y Energía supervisa los cambios en el sector y, recientemente, conformó las 21 Autoridades de Agua en cinco entidades mayores que cubren las principales regiones geográficas del país. Esta iniciativa estaba en consonancia con la ley de privatización nacional aprobada en mayo de 2000. La ley dispone de varias medidas de salvaguardia con respecto a prácticas monopolísticas, y el gobierno se reserva el derecho a poseer, durante un período determinado, una acción que le otorga derecho a veto. Las mayores inquietudes de la sociedad civil con respecto a esta ley tienen que ver con el corto período de tiempo que contempla para que una empresa privada recupere sus inversiones y el relativo secretismo en que quedan envueltos los procedimientos de licitación.

En la conferencia de donantes París II Líbano se comprometió a aumentar la participación del sector privado pero, de momento, se han firmado principalmente con-

tratos por servicios. Unos diez municipios han firmado, desde 2002, contratos con empresas locales para la gestión, el funcionamiento, la provisión y el mantenimiento de pozos, de plantas de bombeo y de tratamiento. De momento, sólo la Autoridad de Agua de Trípoli ha dado los primeros pasos para conceder un contrato de servicios y gestión a un operador privado. Una nueva ley (Ley 401), promulgada en junio de 2003, aprobaba dos préstamos concesionarios por un total de 20 millones de euros otorgados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para mejorar el suministro de agua potable de la ciudad. Los préstamos se utilizaron para aplicar un contrato de servicio y gestión con un contratista privado. Así, Ondeo se convirtió en el primer proveedor de agua privado de Líbano. Aunque la Autoridad de Agua conserva sus responsabilidades administrativas y legales, Ondeo es totalmente responsable de la gestión financiera, de los programas de recuperación de los costes, de definir las políticas de remuneración y de la formación del personal del departamento de finanzas.

El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción también ha contratado a un consultor para que prepare los documentos de licitación para la Autoridad de Agua de Baalbeck-Hermel. El BM tiene en perspectiva un proyecto en materia de funcionamiento, mantenimiento, rehabilitación y facturación. Las actividades previstas para el futuro supondrán, por lo tanto, la total reestructuración del sector hídrico. Entre las medidas propuestas, cabe encontrar una mayor participación del sector privado en el desarrollo y la gestión del suministro hídrico doméstico (ESCWA, 2003).

Oposiciones, resistencias y tendencias

Siria es un país tremendamente centralizado y está controlado por un régimen sin escrúpulos. El gobierno decide las inversiones y las políticas en todos los ámbitos a través de planes quinquenales. Las autoridades locales cuentan con un poder decisorio mínimo, y los ciudadanos pueden presentar sus quejas ante los comités de barrio. Esta política centralizadora, a pesar de ser criticada por obsoleta durante la conferencia del Baaz de 2005, sigue aún vigente. Sin embargo, esta crítica encarna una nueva voz en un país donde nunca se ha tolerado la disidencia, donde las ONG recién han sido legalizadas en los últimos años, donde la censura se aplica a las noticias y las opiniones personales, y donde la sociedad civil está formada básicamente por grupos religiosos apolíticos.

Además, en virtud de la ley de emergencia en vigor desde 1963, se prohíbe toda reunión popular, lo cual deja un escaso margen para manifestarse y, en general, para que surjan actividades o grupos ciudadanos. En este contexto, la opinión popular ante las reformas del gobierno no se expresa públicamente y, por lo tanto, es difícil hacer un seguimiento de ella. Así, nuestros intentos por encuestar las perspectivas de la sociedad civil con respecto a la reforma de los servicios públicos han sido en vano.

En Líbano existe una sociedad civil dinámica, pero los actores de peso dispuestos a oponerse a las reformas previstas son pocos y están divididos. Sin embargo, hay algunas personas cuyo peso político podría retrasar el proceso privatizador en cierta medida. Nos referimos, en concreto, a Hizballah (el Partido de Dios), que sigue siendo un poderoso actor nacional a pesar de haber sido clasificado recientemente por los Estados Unidos como organización terrorista. El nuevo Ministro de Energía, Mohamed Fneish, es el primer y único representante de Hizballah en el gobierno, y se supone que es contrario a la privatización de EdL. También el Presidente de Líbano, Emile Lahoud, se presentó en el pasado como el guardián de los bienes nacionales. El hecho de que el año pasado Siria presionara a Líbano para que modificara su Constitución, de modo que el Presidente Lahoud pudiera prorrogar su mandato tres años más, acabó de erosionar el poco prestigio que le quedaba y está perdiendo poder a marchas forzadas. Hizballah y Lahoud son aliados incondicionales de Siria en Líbano. Otra de las voces críticas procede del Partido Socialista Progresista, cuya cúpula amenazó recientemente con retirar sus tres ministros del gabinete del gobierno si decide sacar adelante la privatización. Y no hay que olvidar el descontento, puede que incluso un movimiento social en ciernes, que intenta mantener el control social sobre los recursos hídricos (véase el recuadro).

Esto significa que, si las probables reformas que tendrán lugar en un futuro cercano se entienden como el resultado de una lucha entre defensores y detractores del régimen actual, es muy posible que los cambios en Líbano se produzcan a gran velocidad. Los reformistas ocupan el poder y la oposición es poco significativa. Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar duro para generar resistencias, algo extremadamente difícil en la Siria actual. Si las reformas se aceleran en Siria se deberá a las presiones internacionales. Los reformistas tienen de su parte, sin duda, el apoyo institucional de la UE, el BM y la OMC. Pero basta con echar una ojeada a los



¿Resistencia en ciernes?

Andit es un municipio de unos 10.000 habitantes situado al norte de Líbano. Comparte sus pozos con Qubayat, el municipio vecino, algo mayor. Sólo una de las siete fuentes es potable; el resto están contaminadas debido a la mala gestión de los recursos hídricos. Los hogares pagan una cuota fija anual de poco más de 30 dólares para el mantenimiento de la red, de la que pueden sacar hasta un metro de agua diario. La Autoridad de Agua local está encabezada por un comité elegido formado por cinco miembros y dirigido por un presidente. Con miras a incrementar las posibilidades de encontrar inversores en el sector del agua, el gobierno ha decidido recientemente integrar las 21 Autoridades de Agua locales en cinco regionales. El Comité de Agua Local, por tanto, debía desmantelarse, y el control del agua traspasarse al gobierno. Pero los vecinos se opusieron a ello, protagonizaron protestas y se negaron a traspasar el agua incluso cuando el gobierno envió soldados, en septiembre de 2005. En palabras del presidente del consejo: *"no queremos entregar nuestra agua al gobierno para que éste se la venda a una empresa que nos la volverá a vender a nosotros"*. Los habitantes arguyen que, con la privatización, los precios subirán irremediablemente. Además, temen que sus tierras pierdan valor si deja de haber agua destinada a la irrigación. Están empezando a reunirse en la zona cuyos recursos hídricos se ven amenazados. Se ha elegido un comité de diez miembros para ganarse el apoyo de otros pueblos e iniciar una campaña. Su objetivo, sin embargo, no es necesariamente dejar fuera a las empresas privadas, sino simplemente conservar el control sobre sus aguas.

debates sobre la futura estabilidad de la región para reducir todo esto a la categoría de mera especulación. Las repercusiones de la guerra en Irak y la presión sostenida de Estados Unidos sobre Siria podrían arrastrar a toda la región a un conflicto más amplio y profundo.

Incluso si los países de Oriente Medio logran no verse implicados en el conflicto, Irak podría aún marcar el tono del papel que deberían desempeñar el Estado y el mercado. En Líbano, aquellos que defienden un Estado orientado al mercado, privatizado en gran medida, son aquellos que ya están bien afianzados en el mercado. Los que abogan por un sistema más mixto, en el que el Estado desempeñe un papel predominante pero donde se permita que el mercado siga siendo libre, son sólo pequeños partidos de izquierda y Hizballah, que representa a aquellos que tradicionalmente se han visto privados de derechos. La tendencia que se imponga influirá de forma decisiva en los servicios públicos. La línea divisoria entre

las distintas fuerzas políticas, sin embargo, no solo atañe al acceso a los mercados, sino también a cuestiones religiosas y étnicas. Muchos Estados árabes, sobre todo Siria y Líbano, deben mantener en equilibrio un complejo mosaico de minorías, clanes y grupos religiosos, algunos de los cuales están armados. La nueva Constitución iraquí, que divide al país en bandos religiosos y étnicos, podría servir como un modelo peligroso para la desintegración de muchos Estados árabes. Por lo menos, exportará los debates en torno al papel del Estado (Young, 2005).

Sin duda, las fuerzas en el poder emplearán todas las medidas restrictivas a su alcance para mantener unidos sus vacilantes regímenes el máximo tiempo posible. Sin embargo, si las reformas podrán realizarse en este clima, si la sociedad civil podrá participar en la toma de decisiones y qué dirección tomarán las reformas, siguen siendo grandes interrogantes.

Referencias

- Brown, F.** (2005) 'Energy Development (Electricity) Tariff Review'. Tomado del sitio web de ISMF: <<http://www.ismf-syr.org>>.
- EC** (2005) *Country Report Lebanon*. European Neighbourhood Policy. Bruselas: Comisión Europea.
- ESCWA** (2003) 'Assessment of the role of the private sector in the development and management of water supply in selected ESCWA member countries'. Beirut: Economic Commission for Western Asia (ECWA).
- Euro-Med Partnership** (2004) 'Syria: National Indicative Programme 2005-2006'. Bruselas: Comisión Europea.
- Executive** (2005) 'Sami Haddad: Q&A'. *Executive*, 75.
- George, A.** (2003) *Syria: Neither Bread Nor Freedom*. Londres: Zed Books.
- Haddad, B.** (2005, Fall) 'Syria's Curious Dilemma'. Tomado del sitio web de Middle East Report (MERIP): <<http://www.merip.org/mer>>.

- Hinnebusch, R.** (1995) 'The Political Economy of Economic Liberalisation in Syria', *International Journal of Middle East Studies*, 27(3).
- Jordan Information Centre** (2005, 8 de febrero) 'EU envoy says Syria ready to cooperate on Lebanon'. Consultado en la web de Jordan Information Centre: <<http://www.jordan.jo>>.
- Oxford Business Group** (2004) *Emerging Syria 2005*.
- Oxford Business Group** (2005) *Emerging Lebanon 2005*.
- Photiades, N.** (2005) 'Dreaming of another donor conference'. *Executive*, 75.
- Plan Group** (2003) *Municipal Administration Modernisation Project in Syria: Identification Report*.
- Polaris Institute** (2002). 'Vivendi Universal - Corporate Profile'. Tomado del sitio web del Polaris Institute: <<http://www.polarisinstitute.org>>.
- Syrian European Business Centre (SEBC)** (2005) 'Annual Work Plan 5: May 2005-April 2006'. Tomado del sitio web de SEBC: <<http://www.sebsyria.com>>.
- UNICEF** (2005) 'At a glance: Syrian Arab Republic'. Tomado del sitio web de UNICEF: <<http://www.unicef.org>>.
- Young, M.** (2005) 'State of Mind'. *Executive*, 75.
- World Bank** (2002) 'Power Sector Restructuring and Transmission Expansion Project, Implementation Completion Report'. Tomado del sitio web del Banco Mundial: <<http://www.worldbank.org>>.
- World Bank** (2005) 'Syrian Investment Climate Assessment: Unlocking the Potential of the Private Sector'. Informe no publicado.